

SINDICALES

El conflicto que viene: marginan a empresarios anti-bloqueos para reglamentar un polémico artículo

Julio Cordero no incluirá al MEAB entre las entidades que negociarán con la CGT el artículo que penaliza los bloqueos sindicales. Otro gesto del Gobierno hacia el poder sindical que sumó, además, medidas en favor de las obras sociales

El pacto Gobierno-CGT avanza a paso firme. Ahora, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, decidió excluir al Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) de las entidades que negociarán con la CGT la reglamentación del artículo que penaliza los bloqueos sindicales. El ex abogado de Techint le había prometido a Verónica Razzini, diputada del PRO y ex titular del MEAB, que ese sector iba a sumarse al Grupo de los 6 para integrar la comisión técnica que consensuará el polémico artículo. Pero Cordero les anticipó a sus allegados que no invitará al MEAB porque la CGT lo tomaría como una “provocación” por la postura extrema de esa entidad contra los bloqueos. ¿Irá a fondo por este tema la coalición empresarial del G6? El titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, es otro abanderado en la lucha contra los bloqueos, pero cree que hay que llegar a un punto de consenso con la CGT. Por esas curiosidades de la política, la UIA viene teniendo una actitud condescendiente hacia el sector dialoguista de la CGT. Unos y otros tienen una excelente relación desde hace

**Doná sangre.
No esperes
que te lo pidan,
siempre
se necesita.**

Doná sangre

BA Buenos Aires Ciudad

.....

Vamos por más

muchos años, pero en las últimas semanas se registró algo que llamó la atención: la UIA no apoyó el proyecto de Democracia Sindical que impulsan la UCR y el PRO en la Cámara de Diputados y consideró que le corresponde a los sindicatos decidir eventuales cambios de su vida interna. “Vemos que algunos proyectos tratan sobre aspectos de la vida institucional de las entidades gremiales y en ese sentido sostenemos que somos respetuosos de la libertad y de la autonomía sindical”, dijo el abogado Carlos Etala, presidente del Departamento de Política Social de la UIA en una reunión informativa de la Comisión de Legislación del Trabajo en Diputados, en agosto pasado, donde expertos de distintos sectores dieron su opinión sobre el proyecto de Democracia Sindical que tanto preocupa a la CGT.

La postura llamó la atención de todo el mundo sindical y dio pie a una sospecha: ¿También existe un acuerdo secreto entre la CGT y la UIA? Lo único cierto es que hay armonía y una suerte de pacto de no agresión. Casi calcado a lo que se instaló entre los dialoguistas de la CGT y el Gobierno, y que en los próximos días se profundizará cuando Guillermo Francos convoque oficialmente a la primera reunión de la mesa de diálogo tripartito en la Casa Rosada.

Hasta ahora, los gestos libertarios fueron contundentes: la Casa Rosada aceptó el pedido de la CGT para reglamentar de manera consensuada el artículo anti-bloqueos de la Ley Bases y garantizó que no avalará el proyecto de Democracia Sindical. Pero hubo más: a partir de la asunción de Mario Lugones en el Ministerio de Salud se tomaron decisiones sobre el sistema de obras sociales que la CGT reclamaba desde hace años. La más reciente fue la resolución que

cuidá
la energía

sumate al
consumo
eficiente

edenor

obliga a las prepagas a dejar de triangular con sindicatos los aportes destinados a la seguridad social. Se trata de una medida que pone en jaque a obras sociales chicas que tienen miles de afiliados gracias a la derivación de fondos de las prepagas. “Son sellos de goma y se llevan los aportes de los trabajadores de mejores recursos”, se quejaban los sindicalistas más poderosos sobre el llamado “descreme” del sistema (porque esas entidades se llevaban la “crema”). El origen de los reclamos de la CGT es que el dinero de los aportes de estos trabajadores no quedaba en el sistema solidario sino que se canalizaba hacia el sistema privado de salud mediante la “ayuda” de obras sociales pequeñas. A este alivio (ahora todos aportarán al sistema solidario), se podría sumar otra que la CGT también pide desde hace años: la creación de una agencia nacional de evaluación de tecnologías sanitarias. Es una idea que propuso durante el gobierno de Mauricio Macri el entonces titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Luis Scervino, un experto sanitarista propuesto por la CGT y echado cuando el sindicalismo hizo su primera protesta callejera, en 2017. Esa agencia, que existe en otras partes del mundo, permitiría que la comunidad científica evalúe la aparición de nuevas drogas y si se justifica su utilización en muchos tratamientos porque son muy costosas y a veces su eficacia es dudosa. Así podría resolverse un enorme problema que tienen hoy las obras sociales, que son obligadas por fallos judiciales a proveer a pacientes medicamentos de altísimo costo y cuya eficacia no está debidamente probada. Javier Milei, a este ritmo, le dará a la CGT lo que no pudieron o no quisieron darles Macri ni Alberto Fernández.

